

Boletín 2

SEMESTRAL | ENE - JUN 2022

CONFLICTIVIDAD en HONDURAS



De la esperanza a la
REALIDAD

Contenido

Acrónimos	3
De la esperanza a la realidad	4
1. Contexto enero	5
2. Cifras del conflicto de enero - junio 2022	8
3. Comparativo primer semestre 2021 - 2022	10
4. Grupos sociales en entornos de conflictividad	11
5. Análisis de la conflictividad enero – junio 2022	13
Conclusiones	18
Línea de tiempo conflictividad	19

Asociación para una Sociedad más Justa - ASJ

**BOLETÍN SEMESTRAL DE CONFLICTIVIDAD EN HONDURAS
ENERO-JUNIO de 2022, número 2**

Coordinación de investigación y autor
Lester Ramírez Irías

Investigadores asociados
Joan Suazo
Julieta Castellanos Cáliz
José Daniel Castillo

Base de datos y diseño web
Jorge Coello

Diseño y Diagramación
VeRo

Foto de portada
EFE / Tomada [El Norte](#)

Julio 2022
Tegucigalpa - Honduras



Acrónimos

ASJ	Asociación para una Sociedad más Justa
BM	Banco Mundial
BCH	Banco Central de Honduras
BCIE	Banco Centroamericano de Integración Económica
CN	Congreso Nacional
CNA	Consejo Nacional Anticorrupción
CNE	Consejo Nacional Electoral
COHEP	Consejo Hondureño de la Empresa Privada
CSJ	Corte Suprema de Justicia
ENEE	Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Hondutel	Empresa Hondureña de Telecomunicaciones
LGTBIQ	Lesbiana, Gay, Transgénero, Bisexual, Intersexual, Queer
Libre	Partido Libertad y Refundación
ICF	Instituto de Conservación Forestal
MP	Ministerio Público
PINU	Partido Innovación y Unidad
PL	Partido Liberal
PN	Partido Nacional
PROHECO	Programa de Educación Comunitaria
PSH	Partido Salvador de Honduras
SANAA	Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados
SEDESOL	Secretaría de Desarrollo Social
SEFIN	Secretaría de Finanzas
TJE	Tribunal de Justicia Electoral
UFERCO	Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción

De la esperanza a la realidad

La Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), por medio del Programa Democracia en Acción, presenta el Monitoreo de la Conflictividad enero-junio, 2022, en seguimiento al esfuerzo para la comprensión de las dinámicas de conflictividad en el país y con el propósito de identificar oportunidades para mejorar la convivencia democrática.

El presente es el segundo informe de 2022, habiendo sido el primero el monitoreo de la conflictividad de enero y febrero que se denominó “[Transición política con transición de país](#)”, en el que se analizaron los retos que enfrentaría el país debido al cambio de gobierno. La primera edición del análisis de conflictividad abarcó todo el 2021 y se denominó “[Conflicto y violencia política en las elecciones de Honduras, 2021](#)”.

Un conflicto social surge cuando dos o más personas o grupos manifiestan la creencia de tener objetivos incompatibles.² Se trata de una lucha sobre valores y reivindicaciones, sobre estatus, poder o recursos, en la cual el propósito de los adversarios es neutralizar, herir o eliminar sus rivales. En este informe, los conflictos sociales se desagregan en cinco tipos:



Para conocer más en detalle la metodología y los registros de los conflictos por medio del monitoreo de las noticias publicadas en formatos radiales, televisivos, impresos y digitales, ver https://revistazo.com/conflictos_sociales/

1| Kriesberg, L., & Dayton, B. D. (2017). Constructive Conflicts. From Escalation to Resolution . Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield.

1. Contexto

Durante la campaña electoral la alianza política entre el Partido Libertad y Refundación (Libre) y Partido Salvador de Honduras (PSH), realizó una serie de promesas que llenaron de esperanza de cambio a los hondureños, pero su concretización en los primeros cinco meses de gobierno ha sido complicada. En muchos casos esta esperanza se ha ido diluyendo ante la impaciencia de la población por cambios materiales que no llegan, en otras ocasiones, el partido de gobierno al tratar de producir cambios se encontrado con la realidad institucional; un Estado débil, sin recursos económicos y con múltiples interdependencias con actores del sector privado y bancos multilaterales.

Al tomar las riendas del gobierno, el Partido Libre recibió una estructura administrativa viciada por la corrupción, un problema energético sin resolver, los efectos de la pandemia Covid-19, los efectos de los huracanes Eta e Iota, una alta deuda pública, así como, una crisis económica mundial inesperada. Unas de las primeras acciones del gobierno de Xiomara Castro de Zelaya fue reestructurar la administración pública central, lo cual implicó la supresión de dependencias gubernamentales y la creación de nuevas, así como, la dotación de mayor presupuesto y la contratación de un nuevo cuerpo de servidores públicas. Estas primeras acciones fueron necesarias para imprimir el sello particular del partido político que gobierna. Sin embargo, las limitaciones en capacidad instalada y políticas públicas claras son retos internos que deben superar para atender las necesidades de más de 4.4 millones de personas que viven en pobreza [\(1\)](#).

Como aspectos positivos del gobierno de Xiomara Castro de Zelaya, se han realizado acciones en favor de los más desposeídos, los hogares con bajo consumo de energía (menos de 150Kws) quedan exentos de pagar la factura, se han subsidiado los combustibles y el transporte, se han denunciado los actos de corrupción de administraciones anteriores y se ha evitado utilizar la fuerza pública para dispersar manifestaciones populares. Asimismo, se ha evidenciado una cercanía con grupos étnicos y colectivos vulnerables como la comunidad LGBTQ.

Pero en otros casos, los nuevos gobernantes se han portado como sus predecesores. El nepotismo no tiene ideología política en Honduras. Asimismo, el clientelismo político en la contratación de empleados públicos ha sido fuertemente cuestionado porque muchos activistas no tienen experiencia o el perfil requerido. A su vez, los altos salarios de los funcionarios y el uso de lujosos vehículos blindados aún son prácticas comunes. Un elemento nuevo para prestar son los colectivos motorizados del Partido Libre que han protagonizado hechos violentos contra empleados públicos contrarios a la línea partidista. Estas actuaciones más adelante pueden un nuevo tipo de violencia organizada paraestatal sino se controla a tiempo.

En el Congreso Nacional (CN), se evidencia un cambio de roles, ahora el Partido Nacional (PN) hace de oposición con un discurso pro-ciudadano. La aprobación de la Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los Hechos no se Repitan

(más conocida como, Ley de Amnistía), para algunos sectores representa un nuevo pacto de impunidad al favorecer a exfuncionarios del gobierno de Manuela Zelaya Rosales que aún antes del golpe de Estado abusaron del poder y fueron procesados por actos de corrupción. Unos de los elementos positivos del CN es la realización de sesiones presenciales, sin embargo, existen exigencias de mayor transparencia y conocimiento de la agenda. Las consecuencias de tener una junta directiva sin ratificación a través del voto de los congresistas aún están por verse. Sin embargo, existe una continua tensión en torno a la legalidad que le resta legitimidad ante sectores de la población.

En lo que respecta al sistema de partidos, el antagonismo natural entre el Partido Libre y Partido Nacional se mantiene como parte del discurso polarizante. La alianza entre el Partido Libre y el Partido Salvador de Honduras (PSH), empieza a mostrar fisuras, especialmente entre los liderazgos como Manuel Zelaya y Salvador Nasralla. En primera instancia PSH apoyó la Ley de Amnistía y luego anunció que presentaría un proyecto de reforma, pero Libre ha expresado que no hay condiciones para cambios. Por su parte, el Partido Liberal (PL) se encuentra en el centro, pero cauteloso de posiciones populistas.

En torno a la lucha contra la corrupción, finalizando el primer semestre, el movimiento para una comisión internacional anticorrupción se ha ido mermando después de los efectos que ha tenido la Ley de Amnistía. Para algunos sectores, el decreto especial ampliando los poderes y autonomía de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), viene a ser una alternativa mientras se instala la comisión internacional. A pesar del rol importante que tiene la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción en el gobierno, su máxima autoridad, Edmundo Orellana, ha denunciado que aún no tiene un presupuesto asignado.

En lo económico se recibió un país endeudado e incluso funcionarios dijeron que el [gobierno](#) estaba en quiebra, por lo que denunciaron no se podría hacer frente a algunas de las obligaciones, esto causó una subida en los [indicadores de riesgo](#) ante organismos internacionales. Sin embargo, en vez de reducir el gasto innecesario y tomar medidas de austeridad, la Secretaría de Finanzas (SEFIN) reformuló el presupuesto general y lo aumentó en más del 16%. Las condiciones del mercado internacional tampoco favorecen a Honduras. Una práctica utilizada para aplazar el incremento de los precios como transporte y combustible ha sido por medio del otorgamiento de subsidios o congelamiento de precios. Estas medidas paliativas mitigan la presión social, pero se compromete la inversión pública.

En materia de seguridad ciudadana se está intentando pasar de un enfoque militarista a uno civil. Hasta la fecha, los índices de homicidios se han mantenido en rangos similares comparados con los de los años anteriores, pero han aumentado las muertes múltiples o masacres. Un problema que está teniendo implicaciones sociales y económicas es el aumento en el cobro de extorsión al sector transporte y empresas. Según analistas este aumento se podría estar dando por una reconfiguración en el crimen organizado.

La migración irregular es un problema permanente en el país, pero el gobierno aún no tiene políticas ni líneas de acción claras para frenarla. La migración se vuelve un tema invisible a menos que sea llevado a la agenda pública cuando suceden tragedias como la suscitada a finales de junio cuando murieron sofocadas en Texas más de 50 personas, entre ellas seis hondureños. Al mismo tiempo se vive en la zona oriental del país una crisis humanitaria por la gran cantidad de migrantes extranjeros que están varados en su paso hacia el norte. Las relaciones con la comunidad internacional, especialmente con los Estados Unidos de América, el principal socio comercial del país y fuente de remesas, no han sido del todo claras. A pesar de intentos del



Foto: IOM Guatemala/Jonathan Mazariegos - Noticias ONU

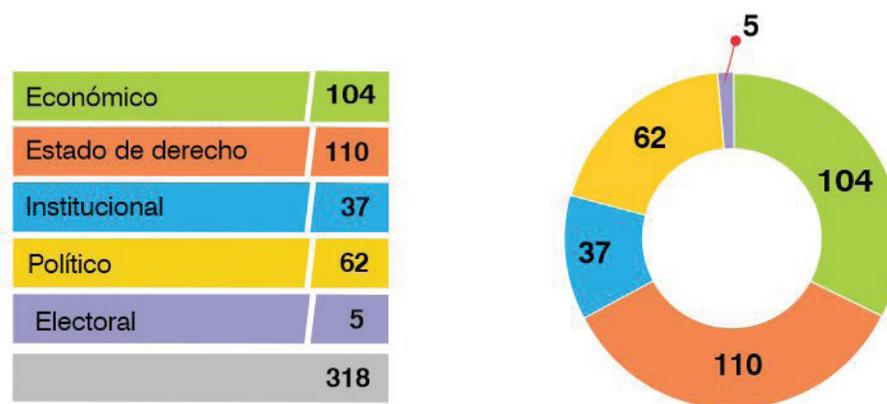
gobierno estadounidense tener mayor cercanía con el nuevo gobierno, demostrado con la presencia de la Vicepresidente Kamala Harris y la visita de por lo menos cinco altos funcionarios de la Administración Biden, la respuesta del gobierno de Xiomara Castro ha sido esquiva.

El gran reto del gobierno de Xiomara Castro de Zelaya como presidenta es evitar repetir las prácticas del pasado, dejando el pasado a un lado porque la población espera respuesta a su presente. Solo así podrá salvar la esperanza que los hondureños depositaron en ella.

2. Cifras del conflicto Enero - junio de 2022

Durante el primer semestre del año Honduras registró 318 conflictos con un promedio de 53 por mes, motivados por una diversidad de causas, pero que reflejan una precarización en las condiciones de vida en materia económica y el incumplimiento en las obligaciones del Estado de proteger la vida, respetar los derechos humanos y asegurar la seguridad de la población y la propiedad privada.

GRÁFICO 1 | Distribución de eventos por tipo de conflicto durante primer semestre de 2022



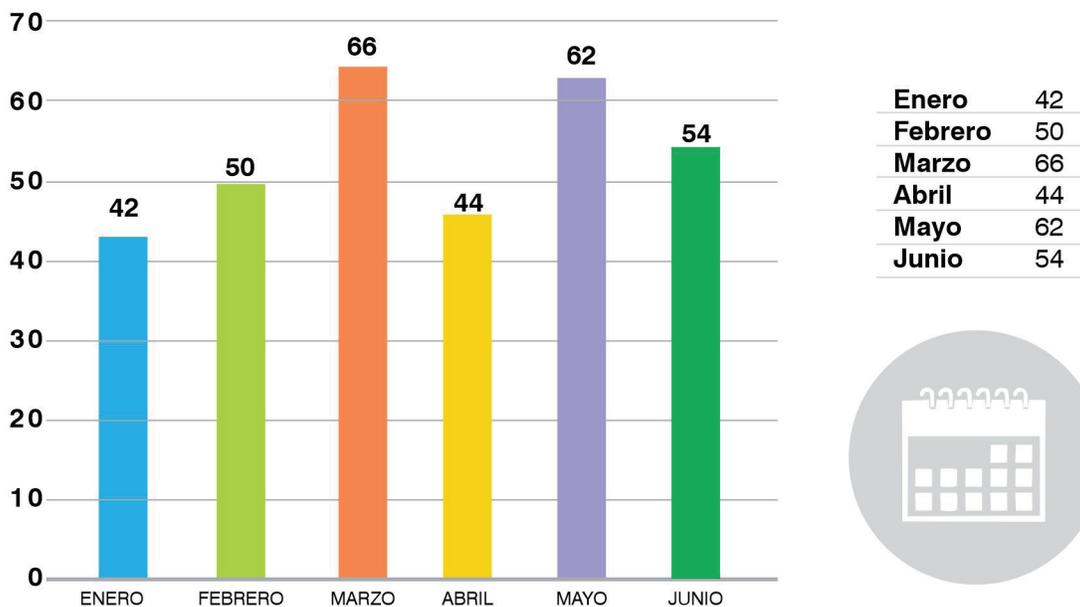
Fuente: Elaboración propia con datos del monitoreo de conflictividad.

ECONÓMICO	Se dieron 104 conflictos de índole económica, la gran mayoría debido a exigencia de empleos, solicitud de contratos permanentes y por falta de pago a empleados y proveedores de las dependencias públicas.
ESTADO DE DERECHO	Con 110 conflictos durante el período, se destaca el malestar por la aprobación de la Ley de Amnistía, denuncias por corrupción en la administración anterior y masacres.
INSTITUCIONAL	Con 37 conflictos que son causados por la falta de capacidad del Estado en cumplir sus obligaciones, se destaca el desabastecimiento de medicamentos, escuelas sin maestros e inconformidad con los nombramientos de funcionarios en puestos relevantes del gobierno.

POLÍTICO	Con 62 conflictos, la mayoría se dieron al interior de los partidos por cuotas de poder o choques con otros institutos políticos. El conflicto más intenso se produjo por las dos juntas directivas paralelas en enero.
ELECTORAL	Con únicamente 5, es actualmente el área con menor conflictividad, esto debido a que actualmente solo queda resolver los recursos heredados del proceso electoral del año anterior.

Al analizar la conflictividad por mes, se observa que el pico de conflictos se produce en marzo cuando las exigencias de empleo público se hicieron ver de manera aguda a través de protestas y tomas. Asimismo, en este mes se produjo protestas del sector transportista.

GRÁFICO 2 | Cantidad de conflictos por mes durante el primer semestre de 2022.



Fuente: Elaboración propia con datos del monitoreo de conflictividad.

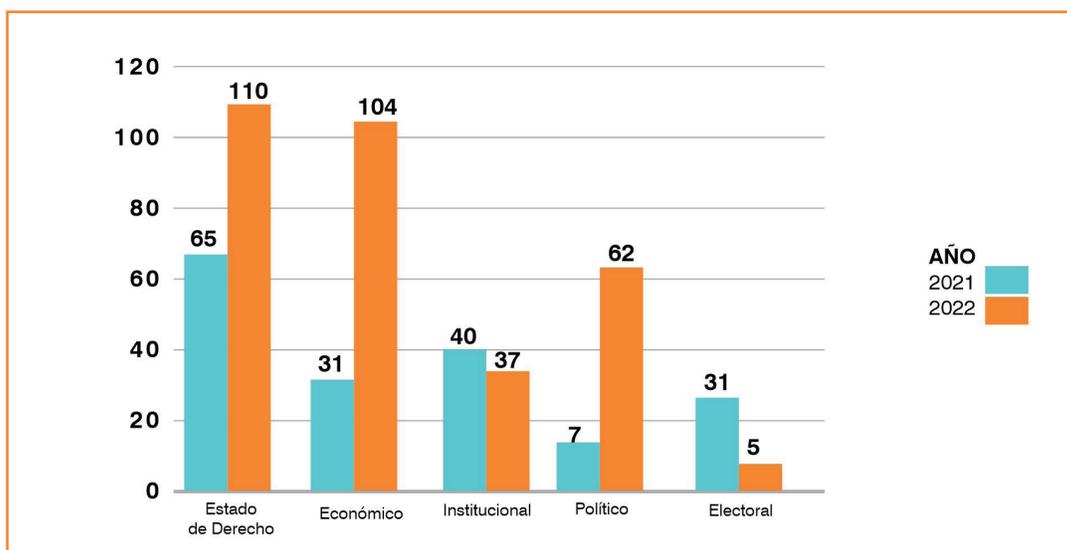
3. Comparativo primer semestre 2021 – 2022

En el primer semestre de 2022 se registraron 318 conflictos mientras que en el mismo período de 2021 se registraron 174, esto equivale a un aumento del 53%. El mayor cambio se da entre los conflictos económicos que aumentaron en un 72%, pasado de 31 en el 2021 a 104 hasta el cierre de junio del presente año. La causa del aumento son las protestas por aumentos en los bienes y servicios como los alimentos y combustibles, así como la falta de pago a empleados públicos.

Del mismo modo se da un incremento importante en los conflictos de Estado de Derecho, aumentando un 65%, esto debido principalmente a las denuncias de corrupción efectuadas por los nuevos funcionarios, la aprobación del llamado “pacto de impunidad” y aumento en las masacres.

TABLA 3 | Comparativo de conflictos por tipo primer semestre de 2021 y 2022.

Tipo de conflicto	Primer semestre 2021	Primer semestre 2022
Estado de Derecho	65	110
Económico	31	104
Institucional	40	37
Político	7	62
Electoral	31	5
	174	318



4. Grupos sociales en entornos de conflictividad

Durante el primer semestre de 2022 aparecen como actores más frecuentes en los sucesos conflictivos los miembros Partido Libre, principalmente exigiendo empleo público. Estos grupos han participado en 70 episodios (tomas de carreteras, toma de edificios públicos, enfrentamientos con empleados públicos y amenazas) documentados por medios de comunicación en todo el país. A pesar de que el clientelismo no genera valor público, mantiene una base satisfecha que contribuye a crear apoyo social en el gobierno. En ese sentido, se espera que esta cifra se vaya reduciendo a medida se vayan colocando en puestos públicos.

En un cercano segundo lugar, se encuentran los conflictos entre políticos con 67. Los conflictos de lucha de poder muestran que la transición no ha sido muy estable, existe una alta polarización, desconfianza y la competencia por los limitados recursos del Estado es alta con el fin del bipartidismo. Entre docentes, personal de salud y otros empleados públicos, se suma 59 conflictos exigiendo estabilidad laboral, mejoras salariales o en su caso, el pago de varios meses adeudados.

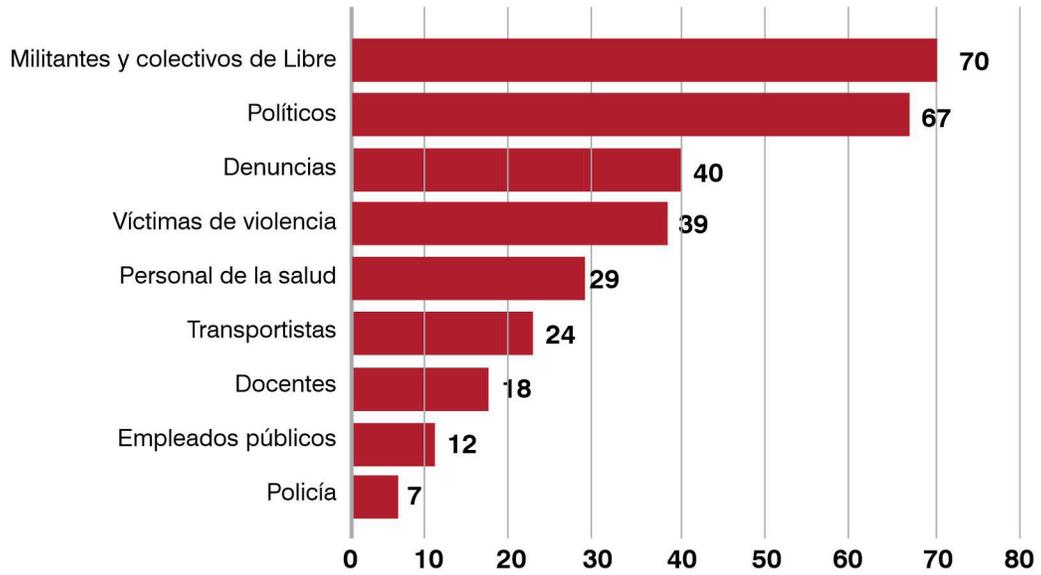
Una dinámica que también destaca en el período son las denuncias de corrupción realizados por los nuevos funcionarios, como José Carlos Cardona, ministro de la nueva Secretaría de Desarrollo Social (antes Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social-SEDIS). En esa misma línea, se hicieron denuncias por los nuevos funcionarios por sabotaje, daños materiales y pérdida de información y documentos por parte de la administración anterior.

TABLA 4 | Grupo sociales en entornos de conflictividad

Grupo social	Cant. de conflictos
Militantes y colectivos de Libre	70
Políticos	67
Nuevos funcionarios denunciando corrupción	40
Víctimas de violencia	39
Personal de salud	29
Transportistas	24
Docentes	18
Otros empleados públicos	12
Policía	7

Fuente: Elaboración propia con datos del monitoreo de conflictividad.

GRÁFICO 4 | Conflictos por grupo social



Fuente: Elaboración propia con datos del monitoreo de conflictividad.

5. Análisis de la conflictividad Enero - Junio 2022

La fragilidad del Estado hondureño se evidencia con la capacidad que tiene un gobierno para gobernar. El papel central del gobierno de Xiomara Castro, los comportamientos de sus liderazgos y la calidad de las decisiones que se toman, tienen un impacto directo en el manejo del conflicto, ya sea logrando mitigar o más bien, escalando. El conflicto social aún no ha escalado para convertirse en episodios violentos en que tenga que intervenir la fuerza pública y surjan denuncias de violaciones de derechos humanos.

5.1 Conflictos económicos continúan incrementando

En el área económica se registraron 104 conflictos durante los primeros seis meses del año, la gran mayoría por alzas al combustible, exigencia de empleos públicos, incrementos salariales y por falta de pago a empleados y proveedores de las dependencias públicas. Como medida de presión, los grupos afectados se han tomado carreteras y edificios públicos. En este primer semestre, las manifestaciones no han sido violentas con daños a propiedad o la utilización de la fuerza pública.

Como medida gubernamental para atender las demandas de diferentes sectores, se ha autorizado utilizar mil millones de dólares de las reservas del Banco Central (BCH) para financiar el gasto público y atender los subsidios. Según el economista Roberto Lagos, si esta medida continua, la falta de suficientes reservas puede poner en riesgo la estabilidad monetaria ante el incremento de la inflación y el alto costo de las importaciones, llevando a una posible devaluación del Lempira. Actualmente las reservas son de unos ocho mil millones de dólares, según información del BCH.

CUADRO 1 | Tipos de conflicto económico

Causa del conflicto	#
Nombramiento en plazas permanentes	52
Falta de pago a empleados públicos	22
Otros*	12
Incremento a bienes y servicios	13
Despidos	5
Total	104

* Protestas de empleados en empresas privada por diversas razones, salida de caravana migrante por mala condición económica entre otros.

Fuente elaboración propia con datos del monitoreo de conflictividad.

El caso de los maestros del Programa de Educación Comunitaria (Proheco) es un ejemplo de la vulneración de derechos por parte del Estado que pone en precariedad económica a familias enteras. Los maestros Proheco con más de diez años de trabajar en comunidades rurales se han visto reemplazados por maestros afines al Partido Libre. El Congreso anterior aprobó su contratación inmediata, pero el actual derogó dicho decreto y la Secretaría de Educación (SEDUC) está nombrando sin concurso a nuevos maestros en los puestos de los anteriores. A pesar de las protestas que han realizado, si situación laboral se encuentra en limbo.

Los trabajadores de la salud también estuvieron muy activos, de forma constante realizaron reclamos en los principales centros asistenciales del país e incluso tuvieron un enfrentamiento con el diputado de Libre, Fabricio Sandoval, que propuso derogar el decreto mediante el cual se contrataba a quienes estuvieron atendiendo en primera línea durante la crisis del Covid-19. Otro sector que fue muy activo en las protestas fue el de los transportistas, ya que debido a los altos precios de los carburantes, aceites y repuestos realizaron paros exigiendo un aumento a las tarifas o un subsidio. Además de esta exigencia, fue permanente la solicitud de apoyo en materia de seguridad para detener el cobro de extorsión.

Hay que destacar que el gobierno congeló los precios del diésel y la gasolina regular, asumiendo los aumentos en el mes de junio, lo mismo pasó con el aumento a la tarifa eléctrica, que correspondía a un 11 por ciento, con lo que el gobierno asume el alza que significaría unos 78 millones de dólares. La mayoría de conflictos han sido paleados mediante la concesión parcial de las peticiones de las partes, los congelamientos de precios en combustibles, subsidios al transporte y tarifa eléctrica significan un sacrificio de 8,338.72 millones de Lempiras al año(). Aún queda pendiente los resultados de la renegociación de los contratos de energía que también implicará atender la deuda heredada con el subsector.

5,2 La fragilidad del Estado de Derecho obstaculiza la gobernabilidad

En la categoría Estado de Derecho se registraron 110 conflictos durante el período, estos conflictos tienen un origen multicausal y de diversas índoles que se vienen arrastrando desde años anteriores y se ven agravados en el contexto actual de relevo de élites políticas dominantes.

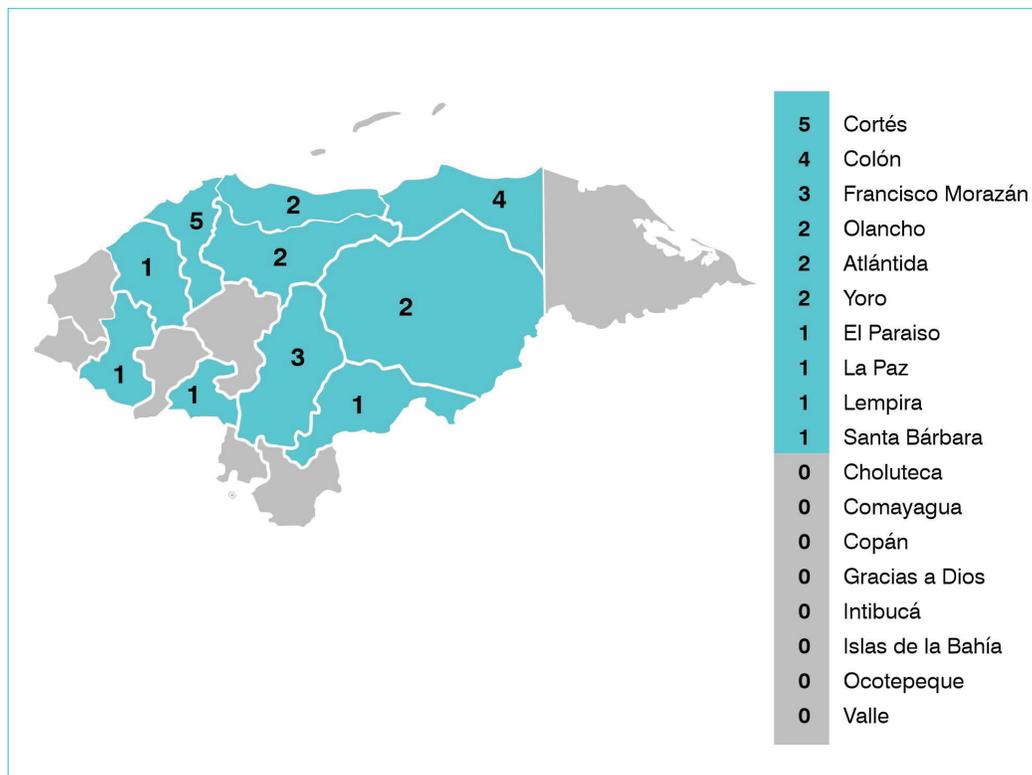
La principal mancha en materia de justicia es la Ley de Amnistía aprobada mientras existía una disputa por la existencia de dos juntas directivas paralelas en el Congreso Nacional. Un fenómeno que en su inicio llamó la atención fueron las denuncias de corrupción que nuevos funcionarios realizaron al recibir las instituciones públicas, develando una situación de saqueo en instituciones como la Secretaría de Desarrollo Social (SANAA), la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), el Instituto de Conservación Forestal (ICF) y Hondutel. A pesar de las denuncias realizadas, no ha habido una medida o plan para prevenir la ineficiencia o mal uso de los recursos por el nuevo gobierno. Cabe mencionar que esta esa unas de las responsabilidades de la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, junto con el Tribunal Superior de Cuentas (TSC). No obstante, se destaca una actitud más beligerante del Ministerio Público (MP), ya que está realizando rápidas acciones de investigación y secuestro de documentos ante denuncias de corrupción presentadas por los nuevos funcionarios. Sin embargo, el otorgamiento de super poderes a la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) por parte del Congreso Nacional, produjo llamados públicos de inconstitucionalidad y “paralela” al MP.

Durante estos seis meses se destaca una reducción de 276 homicidios, en comparación al mismo período del año anterior, pero se da un aumento en la cantidad de homicidios múltiples o masacres. Durante los primeros seis meses del 2021 se dieron 2059 muertes violentas, mientras que en 2022 fueron 1774. En las 22 masacres han fallecido 81 personas durante estos seis meses, de los mismos 73 fueron hombres y ocho fueron mujeres. Se destacan la masacre perpetrada contra tres oficiales de la Policía Nacional en Colón, la cual llevó a decretar un estado de excepción por 90 días en ese departamento. Según datos de inteligencia filtrados, los policías habrían sido asesinados porque interceptaron un cargamento de drogas que transportaban otros agentes y al pedirles dinero para dejarlos pasar, sus compañeros prefirieron ejecutarlos.

Tal como se ha documentado en informes anteriores, la conflictividad por tierras es un tema permanente para el cual aún no se encuentra solución. La empresa privada denuncia la ocupación de tierras productivas e incluso algunas que están siendo trabajadas, mientras que los campesinos consideran que son recuperaciones. Cuando este tipo de conflicto es desatendido, muchas veces deriva en violencia y enfrentamientos entre las partes, por lo que se debe tener especial cuidado en su resolución. Los mayores conflictos se dan en los departamentos de Colón, Atlántida y Yoro, donde se dieron varios homicidios, masacres que se sospecha fueron por tierras y desalojos de tierras. El Ministro de Seguridad, Ramón Sabillón, ejecuta personalmente supervisión de los conflictos en la zona.

Durante el período se dio muerte a dos miembros de la comunidad LGTBI, también a un locutor, un abogado y una fiscal. A pesar de que se declaró trabajar en las investigaciones, ninguno de estos casos ha sido judicializado.

ILUSTRACIÓN | Mapa de muertes múltiples



5.3 El ambiente político se prepara para la elección de la Corte Suprema de Justicia

Durante estos primeros seis meses, se registran 62 conflictos de tipo político. El espacio natural de la conflictividad política ha sido el Congreso Nacional (CN), donde el Partido Libre tuvo conflictos internos, así como, las naturales hostilidades con el Partido Nacional (PN). A lo externo del Congreso, un tema que detona conflicto y produce polarización es el tema de una asamblea constituyente. A pesar que liderazgos del Partido Libre han expresado que no existen condiciones actualmente, no se puede desconocer que es un proyecto político esperando el momento.

La acción de un grupo de diputados disidentes de Libre que buscó romper el acuerdo con PSH para la presidencia del Congreso en enero, ha tenido fuertes ramificaciones en la gobernanza interna del legislativo y ha deteriorado la importante legitimidad que tenía en los meses posteriores a las elecciones generales de 2021. Se debe de resaltar también la violencia en redes sociales que ha sufrido la diputada Beatriz Valle por sus posiciones contrarias a Libre, llegando al punto de ser amenazada a muerte. Con el Partido Nacional ha habido constantes hostilidades, con insultos y exigencias de realizarse pruebas antidrogas, ya que las partes se acusaban de tener actitudes erráticas que podían ser causadas por sustancias psicotrópicas.

A lo interno de los partidos se está popularizando la solicitud de expulsión de sus dirigentes, para el caso los miembros del Partido Innovación y Unidad (PINU) piden la expulsión de la designada presidencial Doris Gutiérrez y la diputada Ligia Ramos porque no han logrado gestionarles empleos, mientras que las bases nacionalistas piden la expulsión del presidente del partido David Chávez, por la derrota electoral. También la cúpula nacionalista expulso a joven diputado Rolando Barahona por apoyó la instalación de la junta directiva presidida por Luis Redondo, además de votar a favor del decreto que otorgaba plazas a los docentes del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO).

En el mes de junio ya se percibía un incremento de las tensiones con respecto a la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ) para el período 2023-2030, aún faltaba aprobar una nueva ley para la junta nominadora y ya se empezaban a barajar nombres y quien tendría el control de la máxima judicatura del país que durante la última década ha servido como brazo operativo de proyectos políticos. La oposición política también tiene su cuota de poder y se visibilizará con la elección de la nueva Corte con altas posibilidades de conflicto. Por su parte, se debe tomar en cuenta las recciones de la población, especialmente aquella que votó por un cambio y siente que sus preferencias o expectativas no son atendidas

5.4 Mayor capacidad de gestión para evitar conflictos de tipo institucional

En el apartado institucional se dieron durante el período 37 conflictos, en su gran mayoría por la falta de capacidad de las instituciones de cumplir sus obligaciones (exigencias de gremios y sindicatos, falta de presupuesto), desabastecimiento de medicamentos, escuelas sin maestros, niños sin asistir a la escuela y los efectos de la pandemia del Covid-19.

La calidad de los servicios públicos sigue siendo una demanda ciudadana, la precaria situación de las empresas nacionales, para el caso, la ENEE siguen los cortes de energía en el país. Las exigencias que se le hicieron a las nuevas autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) por la falta de respuesta en torno a las condiciones deterioradas de los bulevares, avenidas y calles de las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela.

Otra de las causas de conflictividad ha sido el desabastecimiento de medicamentos en los hospitales públicos, autoridades de salud decidieron eliminar la compra a través de fideicomisos y pasar a un modelo de forma directa que está atrasando los procesos de adquisición. Este proceso de compra directa levantó las alarmas ya que históricamente estos procesos son más propensos a la corrupción.

El retorno de los niños, niñas y jóvenes a las escuelas luego de dos años sin clases presenciales por la pandemia no ha ido de acuerdo a lo planeado, ya que muchos centros escolares se encuentran en malas condiciones físicas y sin agua, mientras que muchos otros no tienen maestros.

A medida que este gobierno se consolide, es probable que se intensifiquen los conflictos en el campo institucional, ya que en los últimos 12 años de gobierno del Partido Nacional se dejaron muchas necesidades desatendidas y la actual administración se ha presentado con un enfoque más social, por lo que la población comenzará a exigir el cumplimiento de promesas y que se garantice el acceso a muchos bienes y servicios públicos de calidad.

Conclusiones

1. Una vez creadas las democracias, no necesariamente se consolidan, algunas persisten como regímenes híbridos que contienen características autoritarias. Este fenómeno se aplica al caso de Honduras. Con la simple transferencia del poder de manera pacífica en enero de 2022, las condiciones democráticas han mejorado en Honduras. Pero la interrogante que se debe plantear es si esta ventana de oportunidad podrá ser potenciada o se desperdiciará en proyectos políticos partidarios.

2. Para el segundo semestre del año 2022, los conflictos económicos seguirán manifestándose, las demandas laborales aún no han sido satisfechas, el costo de la vida sigue en incremento y los precios internacionales del crudo se mantienen al alza. La migración y las remesas en cierta medida evitan que el conflicto económico incremente. Mientras el gobierno central pueda brindar concesiones económicas a sectores críticos, otorgando subsidios y controlando precios, los niveles de conflictividad se mantendrán

3. La capacidad de gestión del nuevo gobierno tendrá un efecto en la respuesta gubernamental para entregar servicios públicos como medicamentos, obras públicas para mitigar el invierno y posibles desastres naturales. Los resultados que el gobierno obtenga en la entrega de servicios públicos serán cruciales para la estabilidad del gobierno y la gobernabilidad del país, en un contexto de incertidumbre económica e impaciencia ciudadana.

4. El Estado de Derecho hondureño es constantemente amenazado por la necesidad de generar poder político. Las actuales condiciones de transición han creado un vacío institucional que pondrá a prueba a los políticos. Pero si la justicia hondureña únicamente cambia de manos para continuar impulsando proyectos políticos, entonces las grandes mayorías se mantendrán excluidas y no se sentirán moralmente obligados a cumplir la ley contribuyendo a más corrupción, violencia, inseguridad jurídica e impunidad.

5. Para que la libertad pueda emerger después de un episodio de autoritarismo se requiere de un estado fuerte que pueda controlar la violencia, aplicar leyes y brinde servicios públicos necesarios para que las personas se puedan desarrollar. Por otro lado, se requiere de una sociedad que pueda controlar un estado fuerte. Sin una sociedad vigilante, las constituciones y garantías no valen más que el papel en que están escritas.

6. La ventana de oportunidad que brinda la transición de país no se debe desperdiciar, es crucial poder construir una visión compartida de nación que sobreponga las demandas de partido, amistades o familiares, así como, intereses económicos lícitos e ilícitos. En el corto plazo, se traduce en la voluntad política de impulsar un genuino proceso de reconciliación entre aquellos que deben implementar los compromisos democráticos. Esto permitirá construir confianza para pasar del conflicto que nos divide, al futuro compartido en un marco democrático plural, incluyente y tolerante.

Linea de tiempo conflictividad

Conflictos entre pobladores de Valle de Ángeles

Durante junio se dieron a nivel nacional una serie de ataques de perros a ciudadanos lo que desembocó en diversos tipos de protestas. Muchos sectores reaccionaron en defensa de los animales creando fuertes discusiones a través de redes sociales.

Esto revela que el movimiento animalista, a pesar de no estar organizado, es una fuerza latente en Honduras. Esto podría ser el inicio de un nuevo tipo de protesta que reuna a personas con más conciencia hacia las necesidades de los animales.

A continuación se desarrolla la cronología de uno de los conflictos que comenzó con la denuncia de un ataque de perros a un ciudadano y que escaló hasta llegar a tomas de carreteras por varias horas.

Cronología

22 de junio de 2022

Por la mañana: Una jauría de perros ataca y mata a Félix Velásquez Artica (35), en El Sauce, una aldea aledaña a Valle de Ángeles en Francisco Morazán.

8:00 pm: Vecinos de El Sauce y La Cañada se toman la carretera principal que conduce desde Tegucigalpa a Valle de Ángeles a la altura del desvío de Las Tres Rosas, provocando fuerte tráfico por al menos cuatro horas. La fila comprendió más de 12 kilómetros de vehículos que no pudieron moverse hasta después de la medianoche.

23 de junio de 2022

El Alcalde de Valle de Ángeles, Wilfredo Ponce, informó que se haría una ordenanza municipal para impedir que los ciudadanos de dicho municipio tengan perros de razas que se pueden considerar como violentas.

27 de junio de 2022

Pobladores de Valle de Ángeles y parientes de Artica se vuelven a tomar la carretera que va hacia Valle de Ángeles ya que denuncian que el caso se está dejando en impunidad. Según los protestantes el dueño de los perros se habría ido de la zona gracias a que las autoridades no están investigando el caso. La toma duró unas cuatro horas pero se permitía transitar por un carril, al llegar autoridades policiales desalojaron pacíficamente a los manifestantes.

29 de junio de 2022

Animalistas comienzan a organizar lo que consideran la primera protesta en defensa de los animales, ya que se ha denunciado que desconocidos están envenenando perros en ese municipio.



Asociación para una Sociedad Más Justa - ASJ
Residencial Villa Universitaria
Calle principal, contiguo a la Escuela Nacional de Música
Tegucigalpa M.D.C., Honduras
Tel. 2235-3287 | 2257-3288 | info@asjhonduras.com

www.asjhonduras.com

